

ideologizadas sobre las relaciones entre ambos fenomenos: este es el caso de la imposicion de la nocion "narcoquerrilla", severamente cuestionada por autores norteamericanos (Lee, 1990a y 1990b), en tanto carece de posibilidades de ser demostrada y crea las condiciones para la implementacion de politicas de creciente violentizacion de todos los conflictos en los Andes, antes que generar las condiciones para una comprension de la complejidad de las cuestiones, y por esa via, de la necesidad de crear espacios consensuales de acuerdo que logren resolver eficientemente y con la menor utilizacion de recursos violentos los retos que plantea el narcotrafico y la contestacion armada en los paises andinos.(13)

- VI -

SISTEMAS POLITICOS Y ESTADOS ANDINOS

a) Introduccion

Las relaciones entre Violencia (social y politica) y narcotrafico, son diversas y complejas. En el plano politico, la relacion entre violencia y narcotrafico en los paises andinos ha

tenido que ver tanto con procesos de exclusion de ciertos actores del sistema politico en paises como Colombia (Barrera et. al., 1989); tambien se relaciona con la "convivencia" en determinadas zonas geograficas no cubiertas eficientemente por el poder del Estado -como la Amazonia- entre narcotrafico y grupos contestatarios armados (Reid, 1989 y Paez, 1991), asi como con alianzas entre el narcotrafico y otros actores, tales como los propietarios territoriales y el Ejercito, para enfrentar a los grupos armados y organizaciones sindicales (Reyes, 1990a y 1990b).

iié Por ello es importante entender los procesos atinentes a la conformacion actual y las dinamicas existentes de los sistemas politicos y Estados andinos, para integrar desde una perspectiva politica las variables ya señaladas, de orden estructural y contextual (economicas, sociales e internacionales) para asi trazar un cuadro global, desde un eje politico, que nos permita comprender las multiples y diversas modalidades de violencia politica en la region, en relacion al tema narcotrafico, como un todo integrado.

iié En vista de lo anterior, esta seccion del trabajo plantea que al pensar en las relaciones entre el narcotrafico y la violencia social y politica en nuestros paises, un primer paso necesario es el de indagar en referencia a los sistemas politicos de los distintos paises de la region y las formas de relacion

que se delinean entre Estado y Sociedad(1).

íé Esto no implica desconocer que existen otros factores estructurales y socio-culturales que también tienen importancia en los procesos de violentización de los países andinos, pero que, deliberadamente, han sido focalizados de manera tangencial, ya que el objetivo de este trabajo es relieves un análisis político sobre el tema.

íé Así, una fuente parcial de explicación (en tanto trata de presentar una entrada desde el proceso político) de los grados y tipos de violencia que afectan a las sociedades andinas estaría relacionada con la consideración de las siguientes variables en los casos que se consideran : (a) los modos de estructuración del sistema político; (b) los actores incluidos, las condiciones de exclusión de otros actores; (c) la amplitud del espectro de los partidos políticos; (d) la presencia potencial o real de actores contestatarios violentos; (e) la capacidad institucional de procesar el disenso y responder a las demandas societales, todo ello en referencia a los contextos de los gobiernos civiles de los años ochenta en los países de la región.

íé A las consideraciones anteriores se deben sumar otros planos de análisis, que contemplarían la problematización de aspectos como: (a) la integración política de los distintos espacios regionales en referencia a la sociedad nacional y, (b)

los rangos de autonomía de las Fuerzas Armadas respecto al poder civil.

La desarticulación regional en referencia a la sociedad nacional, así como la debilidad de la presencia estatal en las zonas periféricas de los estados, posibilita un vaciamiento de poder, y el surgimiento de "múltiples soberanías" (Chernick, s/f) que retan al Estado y lo mantienen en una suerte de "jaque ad infinitum" (Menéndez-Carrión, 1989: 13); por su parte, la relación de las Fuerzas Armadas con el conjunto del aparato estatal, en particular con el poder gubernamental civil, también presenta condiciones para que "fracciones del estado" (como la Institución Armada) tengan un grado tal de autonomía que por encima de la decisión política impulsa procesos de violencia en ciertas regiones.

Todo lo anterior nos remite al Estado, actor fundamental en el problema del narcotráfico, por lo que es importante referirse a las consideraciones ya reseñadas, atinentes a su debilidad incrementada por la crisis económica y de la deuda externa (que se expresa dramáticamente en algunos casos), a lo que se añaden consideraciones acerca de la pobre capacidad de control territorial de los mismos sobre zonas teóricamente adscritas a su soberanía.

ii

También deben ser considerados aquellos elementos referidos

a la legitimidad social y política estatal en los distintos espacios regionales, los grados de corrupción que permean algunas de las instituciones estatales, su eficiencia en tanto aparatos burocrático-administrativos y las relaciones de los Estados Andinos con otros poderes en el Sistema Internacional (particularmente los Estados Unidos), en tanto afecten las políticas estatales en los planos narcotráfico y violencia.

iié Los casos de Colombia y Perú, que se examinan en el presente trabajo manifiestan gran diversidad en cuanto a sus procesos históricos previos, la conformación, tipo y ubicación en el sistema político de los actores relevantes, al mismo tiempo que presentan también muchas similitudes en otros aspectos, tales como la tendencia a la autonomización de las Fuerzas Armadas en la lucha antiguerrillera y la presencia simultánea de los dos retos de la contestación armada y el narcotráfico en amplios espacios regionales del Estado, cuestiones que son relevantes para comprender tanto la estructura y dinámicas de los sistemas políticos así como de los Estados de cada país, en referencia a la problemática de la violencia y el narcotráfico.

iié Estas continuidades y discontinuidades son resultado de procesos históricos de larga data, compartidos y diferenciados simultáneamente, consideraciones que no pueden ser desplegadas aquí pero que merecen ser tenidas en cuenta aunque sea de manera tangencial (2) para entender los contextos genético-estructurados

donde se insertan los complejos procesos de la violencia y el narcotráfico en la contemporaneidad.

iiÉ En las paginas siguientes, de manera breve, se examinan las dinamicas de los procesos politicos en Peru, Colombia y Ecuador en especial durante los anos setenta tardios y ochenta, a efectos de entender a mediano plazo el impacto que tuvieron en estos paises las transformaciones de los sistemas politicos y las sociedades nacionales, transformaciones que, someramente, se remiten al agotamiento de los acuerdos elitarios tipo Frente Nacional (en el caso Colombiano) y al rediseño de los sistemas politicos en Ecuador y Peru. En este periodo sujeto a exploracion nos encontramos ante momentos de alta fluidez tanto de los esquemas institucionales de organizacion politica, como de las sociedades, las cuales asimismo sufren en los tres casos procesos intensos de modernizacion (Leal, 1989)(Bocco, 1987)(Kruij, 1989 y Cotler, 1980):

iiÉ Los paises andinos tambien se ven impactados por cambios sustantivos en lo referido a su insercion en el orden internacional, como resultado de las crisis energetica y economica, la crisis de la deuda y el agotamiento del modelo de regimen nacional-popular, asi como de los proyectos Cepalinos de desarrollo (3) y las politicas asociadas con los modelos de desarrollo propuestos desde los cincuenta para el conjunto de los paises latinoamericanos (Sonntag, 1989). Todos estos

condicionamientos domesticos e internacionales abren una etapa critica para los Estados y las Sociedades andinas, etapa en la cual el problema del narcotrafico se imbrica con otra serie de problemas estructurales y politicos previos, integrando un factor que evidencia y profundiza los puntos de conflicto, tanto en la sociedad como en el sistema politico.

iié La suma de todos estos factores ha dinamizando tanto las razones estructurales como las manifestaciones en las practicas del conflicto mismo, de tal manera que, por fuera y por encima de los discursos "nacionales" de los distintos Estados sobre las causas y soluciones al problema, ha permitido que actores estatales exteriores a la region (los Estados Unidos) emitan un discurso que identifica al tema "narcotrafico" como el referente central -y el problema central- de nuestros paises, trasladando sus percepciones de los sentidos y tendencias de la "amenaza a la seguridad nacional" hacia nuestra realidad, y presionando a los Estados andinos para que adopten los diagnosticos y propuestas de solucion emitidos en Washington.

iié Se argumenta en este trabajo que el narcotrafico -y la violencia asociada con el-, mas que causa eficiente de la crisis, es una manifestacion de la misma, ya que este problema se asienta y despliega sobre estructuras sociales y economicas inequitativas, preexistentes, Estados fragiles y sistemas politicos excluyentes, que son el caldo de cultivo real sobre el

que se despliega esta nueva dinamica, que al ser ilegal, tiene un caracter que evidencia de manera dramatica la crisis economica, social y politica en la que se inscribe.

ié La vision del narcotrafico como problema central de nuestras sociedades, erronea e incluso de caracter ideologico, que busca legitimar hegemonias politicas tanto al interior de los Estados Unidos como en el Orden Internacional, ha sido tomada de manera acritica como discurso oficial de los Estados Andinos, (Bonilla, 1991) los cuales a mas de la profundizacion del conflicto interno sufren fuertes presiones internacionales para adoptar diagnosticos y propuestas de solucion que no se compadecen con su realidad social, economica y politica, todo lo cual impacta sobre el manejo del problema del narcotrafico, el cual no se ha resuelto, siendo por el contrario proyectado como fuente de violencia creciente en nuestras sociedades, a raiz, precisamente, de la adopcion de propuestas poco compatibles con la problematica regional.

iéb) El Sistema Politico y los Estados en los paises Andinos: quiebres y conflicto.

ié A continuacion se presenta una caracterizacion de las

modalidades de estructuración contemporánea de los sistemas políticos en nuestros países, en miras a otorgar una visión de las condicionantes institucionales y contextuales en las que se inscribe la Violencia política y el narcotráfico, dada la importancia central que se les atribuye en este texto.

iié Es importante en este punto reflexionar acerca del apareamiento de nuevos actores sociales y políticos en nuestras sociedades, desde los setenta y durante los ochenta, entre los que se encuentran las nuevas elites emergentes relacionadas con el control vertical del complejo productivo coca-cocaina, las cuales en el caso colombiano han presionado al Sistema Político para su inclusión directa en la toma de decisiones (Barrera et. al., 1989: 29 - 41) (Murillo et al., 1991:226-232), tanto por vías institucionales como mediante mecanismos parainstitucionales, es decir o intentando organizar partidos políticos (como el Movimiento Latino de Carlos Ledher) o mediante la intimidación y acción armada, es decir mediante el llamado "narcoterrorismo", cuyo auge como mecanismo de presión sobre el Sistema Político y la sociedad colombianas se manifestó con mayor fuerza desde 1989.

iié

(f) Sistema Político Colombiano: el acuerdo elitario y sus implicaciones

iiÉ

iiÉ El Sistema Político Colombiano se ha caracterizado por haber mantenido una continuidad histórica basada en el bipartidarismo -aunque con quiebres y conflicto generalizado- durante prácticamente toda la vida republicana (Leal, 1989 y Sánchez, 1990). La estructuración de este sistema político refleja inicialmente una ideologización extrema de las estructuras partidarias (liberales y conservadores) (Leal, 1989), lo que revertiría en procesos de violencia cíclica a lo largo de la existencia de Colombia como país independiente (Sánchez, 1990), violencia que marca toda su historia política con rasgos particulares, pero que fue especialmente feroz durante los años que van de 1948 a 1953. (Sánchez, 1990 y Leal, 1989)

iiÉ Una vez agotada la fase de "La Violencia", en el contexto del retorno a las administraciones civiles, luego del período dictatorial de Rojas Pinilla (1953-1958), y para evitar que la continuidad del conflicto violento entre los dos partidos tradicionales deviniese en una mayor disolución social y política, se firman (en España) acuerdos entre las cúpulas partidarias liberal y conservadora, las cuales llegan a un restrictivo acuerdo, de carácter elitario, que reparte equitativa y alternativamente el poder entre los dos partidos por un lapso de veinte años, desde 1958 hasta 1978. El funcionamiento del sistema consociativo del Frente Nacional es eficiente durante

esta época, y al finalizar la misma, si bien el pacto se agota (tanto en sus aspectos formales como respecto a una sociedad transformada), continua en la practica como acuerdo cerrado que impide la participacion a todos los grupos que no se adscribiesen a las corrientes partidarias liberales o conservadoras. (Leal Buitrago, 1989)(4).

iié No solo existe un agotamiento "temporal" de los terminos del pacto, sino tambien una crisis social del mismo a fines de los setenta, a resultas de la complejizacion profunda de la sociedad colombiana, que habia presentado procesos de acelerada movilidad social hasta aquellos anos, urbanizacion creciente de la sociedad nacional. Una de las tesis que se esgrimen para explicar el impacto social del narcotrafico en Colombia, alude precisamente al bloqueo de los canales de movilidad social y a la disminucion porcentual del estrato medio en los ultimos anos de los setenta, apareciendo la llamada "cenicienta clase media", como expresion de la pauperizacion creciente de estos estratos, todo lo cual abona un terreno fertil para la expansion de la economia subterranea relacionada con el narcotrafico y el emerger de nuevas elites sociales y politicas que intentan ser incluidas en el sistema restringido (Murillo et. al., 1991:207-210).

iié Cabe senalarse tambien que este proceso tiene mucha importancia al momento de entender la violencia social en Colombia: la urbanizacion acelerada y el estrechamiento progresivo de los mecanismos y canales de movilidad social, a mas

de condiciones de caracter economico-estructural -como los bajos niveles educativos y de calificacion de la fuerza de trabajo-, a lo que se suman las caracteristicas demograficas de la poblacion (mayoritariamente joven) posibilitan el emerger de sectores sociales marginales, asentados en las periferias urbanas de Bogota, Medellin y Cali, donde se presentan elevados grados de delincuencia y violencia social, grupos que se transforman prontamente en fuentes para el reclutamiento de personal de apoyo para las acciones violentistas de los grupos de narcotraficantes.

Con respecto a las restricciones a la participacion politica por fuera de los tambien estrechos canales (que atravezaban a los partidos tradicionales) disenados por el Frente Nacional, ilustrativa la experiencia de ANAPO (Accion Nacional Popular), grupo politico afecto al ex-dictador Rojas Pinilla, el cual habria ganado las elecciones de 1974, pero cuya victoria no fue reconocida por el establishment politico, empujando de esta manera a los sectores jovenes y radicalizados del mismo hacia la accion armada, la cual seria vehiculizada mediante el grupo M-19, que tambien incluye un grupo de ex-militantes jovenes del Partido Comunista, durante los setentas tardios y los ochentas. (Cfr. Leal Buitrago, 1989)

Asi, la logica de exclusion determino que el bipartidarismo se "desideologice" (respecto a los parametros que se habian establecido a lo largo de toda la vida republicana), generandose

de esta manera procesos de anomia y baja participacion electoral, lo que hace que el conflicto politico, cuando no podia ser procesado mediante la institucionalidad bipartidaria, sea enviado a la periferie (ilegal) del sistema politico y los partidos tradicionales; estos dejan de ser, gracias a los acuerdos del Frente Nacional, los polos contradictorios y ejes basicos del conflicto politico, ya que la coparticipacion equitativa del poder estatal los habia transformado en socios no antagonicos.

De esta manera las amenazas mayores para el sistema recientemente estructurado pasan a ser las secuelas de la Violencia y la movilizacion campesina que se dio a lo largo de la decada de los cincuentas, durante el mismo proceso, base sobre las cuales se insertan los proyectos guerrilleros de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, procomunistas), inicialmente, y luego del EPL (Ejercito Popular de Liberacion) y ELN (Ejercito de Liberacion Nacional) ya entrados los sesentas. Posteriormente, el M-19 se constituye en una nueva expresion contestataria armada, con mayor apoyo urbano que rural (por sus propios origenes politicos en la ANAPO) en los setentas tardios y ochentas (Medina, 1986 y Fizarro, 1986)(5)

Las demandas sociales y conflictos politicos que no podian ser procesados mediante los canales elitarios y restringidos que habia disenado el Frente Nacional, se trasladan a la periferie del sistema, una periferie que rondaba la nocion "subversion" desde las perspectivas de los militares colombianos, los cuales

adoptan una vision de la Seguridad Nacional extremadamente "dura", en un contexto de amenaza guerrillera permanente, lo que logro autonomizarlas del poder civil hasta el punto de que se plantea un rol de "arbitraje" para las Fuerzas Armadas en el Frente Nacional, que en un momento dado pudo llevarles a pensar en la posibilidad de tomar el poder directamente (Leal Buitrago, 1989:206-219)(Fremo, s\fi:170). Esta prioridad de una nocion radicalizada de la seguridad nacional hace que las Fuerzas Armadas sean el administrador real de la paz publica (6) por fuera del poder civil, con lo que fracciones del Estado cobran una autonomia casi soberana: la situacion de multiples soberanias,(Chernick, s\fi:5) (7) no solo se presenta como resultado de los procesos provocados por la presencia de grupos armados que retan al Estado en su control sobre los mecanismos coercitivos y el territorio, sino tambien por parte de sectores o "fracciones del estado" que se autonomizan y operan libremente en el escenario.(8)

¶ Otro elemento importante para caracterizar el sistema politico colombiano contemporaneo, que segun algunos autores seria un "autoritarismo incluyente" radica en la comprension del caracter patrimonial y clientelar del mismo. En estudios de la decada anterior ya se habia senalado esta condicion central del manejo politico parainstitucional, pero que sin embargo es aceptado como practica permanente del sistema por los dos partidos; es asi como la penetracion de las nuevas elites

relacionadas con el complejo productivo coca-cocaina en el sistema politico se facilita gracias a y se relaciona con el clientelismo como modalidad de accion politica (Diaz Uribe, 1986:138), (Paez, 1989a) (Leal y Davila, 1990).

Paralelamente, sin embargo, el narcotrafico ha utilizado habilmente el mecanismo de articulacion politica mas importante del sistema politico colombiano: el clientelismo. Sustentada sobre el otorgamiento de retribuciones materiales a cambio de lealtad electoral, esta forma de relacion politica deja el espacio abierto a la penetracion del capital del narcotrafico. Este encuentra en la financiacion de campanas electorales o en la satisfaccion de demandas de la poblacion a cambio de apoyo electoral para sus testaferros, el escenario propicio para manifestar su poder y generar caminos expeditos para su integracion a la vida politica nacional (Reyes, 1990:5)

É Dentro de las estrategias resenadas anteriormente, tendientes a la inclusion de las nuevas elites en el sistema politico colombiano, la penetracion clientelar cobro gran importancia a principios de la decada del ochenta. La presencia del llamado "dinero caliente" en las campanas electorales, a pesar de la guerra del Estado contra las mafias, sigue existiendo a lo largo

de toda la decada pasada, fundamentalmente en los espacios regionales, donde ademas se pueden dar alianzas coyunturales entre diversos actores como narcotraficantes, ejercito y propietarios territoriales, en miras a desplazar a otros actores, como la guerrilla o las organizaciones campesinas y sindicales, por medios violentos.(Reyes, 1990b)

Si bien el espacio del poder estatal en su nivel de representacion nacional se mantiene relativamente "estanco" a la penetracion de las elites emergentes, en los poderes regionales, la presencia del narcotrafico por medios clientelares y de alianzas ad-hoc con otros actores (estatales y sociales) es relevante, particularmente en las zonas con gran inversion por parte de los narcotraficantes, inversiones que se dan fundamentalmente en propiedad territorial y ganaderia.(Reyes, 1990a y 1990b)

Las perspectivas actuales del sistema politico herencia del Frente Nacional son tendientes a una apertura controlada del sistema politico, ya que la multiplicacion de los conflictos violentos han llevado a las elites a pensar en la necesidad de abrir el sistema, permitir la participacion de grupos y sectores antes excluidos del mismo. La dinamica de inclusion en realidad ya se habia empezado a preparar y realizar -con problemas y limitaciones- durante el gobierno de Betancourt, entre 1982 y 1986, (Chernick, 1989), aunque las iniciativas de pacificacion de

este gobierno se vieron limitadas por la expansion de la violencia, en particular aquella relacionada con el narcotrafico, la guerrilla, los grupos paramilitares y la accion represiva del ejercito.

iié

iié El punto mas interesante de estos intentos de ampliacion del sistema politico constituyo la inclusion del partido Union Patriotica (UP), rama legal del PCC (Partido Comunista de Colombia), que participo en las elecciones desde 1986; la cercania politica de la UP a las FARC lo hicieron blanco de las actividades de los grupos paramilitares de derecha, que durante los siguientes anos se dedicaron al exterminio de militantes y dirigentes de la UP en todo el pais, haciendo abortar esta apertura, la cual, por lo demas, habia sido cuestionada por el Ejercito y la elite politica, en razon de sus vinculos con la FARC. (Archer y Chernick, 1989:65-68)

iié Durante el gobierno de Barco (1986-1990) se intento dar nuevamente pasos en el sentido de ampliar el sistema politico colombiano, los cuales tambien fracasaron parcialmente, aunque uno de los mayores exitos en la ampliacion politica se dio cuando el M-19 abandono la lucha armada y se integro a la politica partidaria, compitiendo en las elecciones presidenciales a pesar del asesinato de su lider Carlos Fizarro poco antes de la justa electoral. En los ultimos anos de Barco, Colombia asistio a la peor epoca de Violencia en los ultimos treinta anos, con la

muerte de varios precandidatos y candidatos presidenciales, miembros seniores de la elite politica y social, en gran parte debido a la accion de "propaganda armada" de los grupos de narcotraficantes en contra de la extradicion, y tambien a causa de la imbricacion de distintos tipos de violencia, que cruzan multiples actores simultaneamente. (Reyes, 1990) (Chernick, s/f)

iié Al momento, en el Gobierno de Gaviria, la mas extensa propuesta de pacificacion se ha presentado, propuesta que ha incluido dialogos con la Coordinadora Guerrillera Simon Bolivar (CGSB) y acuerdos con los "Extraditables" para garantizar su enjuiciamiento en territorio colombiano. Sin embargo, la oposicion a la estabilizacion de procesos de pacificacion y el logro de una paz permanente se evidencia en los "tira-y-afloja" continuos entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simon Bolivar, con quien se esta reuniendo en Caracas al momento de escribirse este trabajo. Otro punto central en la reconstitucion del sistema politico Colombiano lo constituyo la convocatoria y eleccion de la Asamblea Constituyente, la posterior redaccion de una nueva Constitucion que incluyo la prohibicion expresa de extradicion a ciudadanos colombianos, y que integro a su interior no solo a los partidos legales, sino tambien a representantes de grupos armados (como el Quintin Lame, guerrilla "societal" de acuerdo a la clasificacion de Pizarro [1990]) y organizaciones sociales.

iié Las negociaciones con los narcotraficantes, su posible

sometimiento a la justicia colombiana, en terminos tales que garanticen la no extradicion y que permitan ciertos margenes de seguridad para los mismos, tambien son muy complicadas: presiones externas, particularmente norteamericanas complican el panorama de un probable acuerdo final, aunque -aparentemente- se ha avanzado mucho en lo que se refiere a acuerdos parciales, que por lo menos logren desactivar una de las fuentes mas evidentes de violencia politica en Colombia.

11 La violencia que desato el narcotrafico se debio originariamente a una condicion de exclusion que se plantea el sistema politico, cuando el llamado "cartel de Medellin", que habia logrado ciertos grados de legitimidad social y economica, se activa como actor politico y quiere acceder a la toma de decisiones. Inicialmente, a principios de los ochenta, estos sectores de la narcoburguesia se trazan una estrategia institucional, que implica la penetracion en los partidos tradicionales (Escobar Gaviria llego a ser diputado por los liberales), o la creacion de nuevos partidos, de base regional, como el llamado "Movimiento Latino" de Carlos Ledher, usando mecanismos de locacion de recursos y creacion de redes clientelares, practica corriente y aceptada en el sistema politico colombiano. (Diaz Uribe, 1986 y Leal-Davila, 1991)

12 El paso hacia una estrategia parainstitucional se situa en el punto en que las elites tradicionales empiezan a preocuparse

seriamente a causa de la creciente presencia del narcotráfico en los partidos del tradicionales, y cuando, por ello, la legitimidad económica y social de los narcotraficantes se encuentra represada en el plano político. Una vez desplegada esta estrategia parainstitucional, la lógica de conflicto se vuelve preeminente entre el Estado y los grupos de narcotraficantes. (Murillo et.al., 1990). Esta lógica de enfrentamiento entre Estado y Extraditables se amplía hacia la sociedad, la cual también se transforma en referencia para el ejercicio del llamado "narcoterrorismo", en miras a conseguir mediante la "propaganda por la acción" amedrentarla, y así abrir un mayor espacio de negociación política frente al gobierno.

ifé Esto no obsta para que en determinadas zonas con conflictos en marcha, particularmente aquellas con presencia guerrillera y/o organización campesina, los narcotraficantes (en su rol de grupo propietario y élite social) logren acuerdos y alianzas con los grupos propietarios tradicionales y ciertas fracciones del Ejército, con el objetivo de desplazar a las organizaciones izquierdistas de sus zonas de influencia. A esta violencia, que en otro punto de este trabajo se ha denominado "transicional", por contener elementos sociales y políticos entremezclados, se debe gran parte de las muertes producidas en la Colombia de fines de los años ochenta.

iié Concluyendo, la violencia asociada con el narcotráfico tiene por lo menos dos fases: contra el Estado y las elites políticas, por una parte, por otra, en busca de atemorizar a la sociedad para permitir la inclusión, y por una tercera, cuando los narcotraficantes se asocian con las elites sociales propietarias tradicionales y con sectores "duros" del Ejército, para enfrentar al movimiento social organizado y las organizaciones de izquierda, tomando en este caso un perfil clasista y netamente antiguerrillero.

iiéd) Perú: las limitaciones de la apertura y los contextos de la violencia

iié

iié Para el caso Peruano se puede argumentar que la apertura "transicional" del gobierno militar peruano (1968-1980) hacia las administraciones civiles es bastante demorada, y abre las puertas de la participación política de manera tardía, respecto a los ritmos de la movilización social que se impulsó durante los primeros años de los setentas, lo que permitiría el crecimiento de la Violencia política precisamente en un contexto político "democrático" y de apertura.(9) Las expectativas que despertó la democracia, no fueron satisfechas, en un contexto de alta movilización social, resultado de las políticas modernizantes del Estado y la sociedad desplegadas durante el régimen militar, con

lo que la erosión del significado mismo de la "democracia", por el bloqueo de las amplias expectativas sociales, ha avanzado rápidamente. (Degregori, 1990)

iié

iié Al contrario que en el caso colombiano, en el caso peruano se presenta, aunque con ciertas contradicciones de orden regional, que posteriormente incidieran en la germinación de la contestación armada, un real desmonte de la organización social y política oligarquica previamente existente, proceso que se cumple durante los años de los gobiernos militares, particularmente en la fase dirigida por el ala más reformista de las Fuerzas Armadas, liderada por el General Juan Velasco Alvarado, que se extiende desde 1968 a 1975. En esta primera parte del Gobierno Militar, se avanza en la realización de un proyecto político modernizante, que transformo a la sociedad peruana de una manera bastante más profunda de lo que se percibió originalmente (Lowenthal, 1983: 415). (Kruij, 1989)

iié El Perú, durante estos los años que van de 1968 a 1975, experimento una expansión estatal bastante rápida, con el consiguiente desarrollo de una capa tecnocrática favorable al cambio, aunque carente de su propia expresión política autónoma (Lowenthal, 1983: 426); a resultas de la profundidad de las transformaciones, la movilización popular se incremento de manera significativa en estos años, creciendo la presencia de las organizaciones laborales desde los setentas y hasta principios de

los ochenta, al igual que la organización campesina, la que por su parte fue empujada por el proceso de reforma agraria y la organización popular en general, que intentó ser articulada corporativamente mediante estructuras estatales como SINAMOS (Cotler, 1983).

iié Todo lo anterior, en el contexto de profundos cambios en la estructura económica del país, que implicaron el crecimiento de la infraestructura industrial y la fortificación y racionalización de la burocracia peruana, la cual se había caracterizado hasta ese entonces por ser una de las más ineficientes del continente. A lo anterior debe agregarse una gran baja del perfil de acción de las corporaciones multinacionales, lo cual también había sido uno de los elementos centrales en el sistema existente antes del golpe de estado de 1968, y, además, profundos cambios fundamentales en la estructura de valores de la sociedad. (Lowenthal, 1983: 427-29)(Cfr. Kruij, 1989)

iié La desestructuración global de los cimientos económicos y sociales del poder tradicional se ve acompañado por la movilización popular y la ampliación de la organización de los estratos sociales subalternos. El fenómeno, si bien es de carácter nacional, sufre también los efectos de los profundos e históricos desequilibrios regionales preexistentes en el Estado peruano (Flores Galindo, 1987).

ii En zonas "perifericas" respecto a los ejes centrales de desarrollo nacional que postulo el proyecto militar reformista, el "vaciamiento" del poder terrateniente --que ya habia languidecido desde los cincuentas, e incluso en determinadas zonas, como Ayacucho, desde antes --, no tuvo las características de enfrentamiento abierto de las elites tradicionales al poder estatal: al contrario, el Estado --extranamente-- se alio con los restos del poder terrateniente en estas zonas marginales, provocando reacciones sociales no solo contra los poderes tradicionales locales en disolucion, sino tambien contra el mismo Estado. (Degregori: 1990:f15-40)

ii A raiz de la transicion del autoritarismo militar en su segunda fase (1976-1980), en la que se abandonaron los postulados modernizantes que se aplicaron hasta 1975, hacia los gobiernos civiles, el sistema politico se amplia significativamente para dar entrada a casi todos los grupos politicos del pais, en contradiccion con la logica excluyente previa, que habia impedido sistematicamente la participacion politica de los grupos y partidos marxistas por via de disposiciones legales, y en ultima instancia, mediante la violencia.

ii Esta caracteristica excluyente no solo se habia practicado con los grupos marxistas anti-sistema, sino que hasta el mismo

APRA en su etapa denominada "auroral" (desde su fundación hasta la década del cincuenta) fue permanentemente excluido del poder, a pesar de haber sido la primera fuerza electoral del país desde los años treinta, y aunque llegó a acuerdos con el bloque oligarquico durante los años finales de los cuarenta y las décadas del cincuenta y sesenta, (Kruij, 1989) conformándose así una cultura política "conspirativa" entre prácticamente todos los sectores de la izquierda, marxista y no marxista, para así enfrentar al Estado.

iié En esta relación se puede ubicar una de las raíces históricas que permiten explicar (parcialmente) fenómenos como Sendero Luminoso, que establecen una línea de continuidad con las visiones "conspirativas" y militaristas, características de la izquierda marxista peruana hasta inicios de los setentas, la cual actuaba en un contexto político signado por la exclusión. (Degregori, 1990: 165 y s.s.)

iié Las transformaciones realizadas durante los setentas permiten la expansión de la presencia de la izquierda marxista en los distintos movimientos y organizaciones sociales y poblacionales, por lo que amplían su capacidad de agregación electoral durante este período. La presencia de partidos marxistas con posibilidades de expansión electoral, y que por ello incrementan su fortaleza relativa a lo que se debe sumar su capacidad de articular sectores significativos de la población en

espacios reivindicativos sociales, desplazando al AFRA de su hegemonia indiscutida en el movimiento social, (Cotler, 1983) es un cambio central que nos permite entender la ampliación del sistema político peruano post-dictadura.

ii Otro efecto de los cambios inducidos por el gobierno militar afecta la capacidad política de los partidos tradicionales, que languidecen política y electoralmente, mientras se abre el espacio para la opción "reformista" representada por AP (Acción Popular, partido surgido en los años cincuenta, de clase media) y también para el AFRA, que a pesar de los pactos con las élites tradicionales oligárquicas seguía manteniendo una imagen "reformista" (Cotler, 1980), las que toman el gobierno durante toda la década de los ochenta.

iii Estos partidos enfrentan una alternativa y posibilidad real de constitución de poder, o por lo menos presencian una disputa creciente de la hegemonía en la sociedad, por parte de la izquierda marxista, alternativa que no llega a realizarse, pero que se expresa en términos electorales de una manera fuerte durante las elecciones de 1985, en que el triunfo de Alan García (que debía confirmarse en segunda vuelta electoral) no se consigue con mayoría absoluta, a pesar de que estuvo muy cerca de ello, pero se consolida ante el retiro de la candidatura de Alfonso Barrantes, apoyado por la Izquierda Unida que alcanza aproximadamente un 25% de los votos válidos emitidos, y que logra

copar partes significativas de los aparatos de poder regional y de representacion parlamentaria.

ii Sin embargo de esta ampliacion del sistema politico y la posibilidad que abre para el posible ejercicio de proyectos politicos alternativos, los desequilibrios fundamentales en la organizacion regional del pais se manifiestan con gran fuerza. La contradiccion historica entre Lima y la Sierra se hace patente (Flores Galindo, 1987), particularmente en las zonas mas deprimidas economicamente de la serrania, como las pertenecientes al departamento de Ayacucho y sus provincias, donde se organizan, desde fines de los anos sesenta, las bases del Partido Comunista del Peru-Sendero Luminoso (FCP-SL) y donde, gracias a condiciones estructurales y regionales definidas, se posibilita la activacion de una voluntad politica armada, para asi enfrentar abiertamente al Estado Peruano. (Degregori, 1990)

iii Los resultados inesperados de las grandes transformaciones acaecidas durante el gobierno militar, tales como la culminacion del largo proceso de "vaciamiento" del poder terrateniente, sumados a condiciones regionales especiales (como la importancia fundamental de la Universidad de San Cristobal de Huamanga o la depresion economica regional de larga data) posibilitan asi el aparecimiento del grupo armado de mayor duracion en el Peru contemporaneo, (Degregori, 1990) que se ha transformado en un

reto permanente a la estabilidad institucional y la seguridad de la poblacion, tanto por su actividad armada, como por la respuesta estatal que produce.

De acuerdo con los parametros planteados por Chernick (s\f), se estaria viviendo los momentos iniciales de una potencial situacion de "multiples soberanias", especialmente en zonas que no se encuentran bajo el control estatal, como las regiones cocaleras de la Amazonia, donde SL ha podido montar de alguna manera su proyecto de la "Nueva Republica" (Quehacer, 1989:54-61), y donde ha establecido lazos fuertes con la poblacion de colonos campesinos, demostrando su capacidad para cambiar de estrategias de relacion con la sociedad, dependiendo de las características politicas y militares en un Estado altamente fragmentado en terminos regionales. (Degregori, 1990)

Los proyectos de integracion nacional, liderados por un Estado centralista, con una tradicion historica de imposicion por la fuerza sobre las zonas perifericas del pais, que parte desde la Colonia y fundacion de la Republica, y que sigue manifestandose hasta nuestros dias, no logran sus objetivos de generar una "nacion", integrar y desplegar los mercados interiores, producir un desarrollo armonico y superar las inequidades mas evidentes: en algunos casos, las decisiones tendientes a dinamizar los ejes mercantiles y de intercambio, para asi posibilitar la expansion del mercado y unificar los

espacios regionales, tienen efectos no pensados, incluso contradictorios con las perspectivas originales, tales como -en el caso de Ayacucho- profundizar la crisis económica regional y reducir aun mas la minúscula actividad comercial de la zona, al alterar los ejes de intercambio comercial tradicionales, debiles pero relativamente estructurados, hacia otras zonas del país con mayores ventajas comparativas para atender el mercado limeno, el unico realmente significativo. (Degregori, 1990)

iié Estos cambios se producen mientras el Estado no puede reemplazar la función de las decadentes elites regionales en la estructuración y liderazgo social y político de las sociedades regionales, aunque posteriormente también existe una ampliación de la presencia Estatal, y de las redes mercantiles y financieras que este impulsa, pero que en casos como los de Ayacucho, llegan después de que el fermento social es catalizado por la ideología insurreccional de SL.

iié Mientras el Estado adecuaba sus instituciones y proyectos para responder los "vaciamientos" sociales antes reseñados, ya se habían puesto los cimientos sociales y contextuales para el despliegue del "fundamentalismo" antiestatal senderista, con cierto apoyo en determinados estratos sociales como los estudiantes y maestros (Degregori, 1990: 189), los cuales ejercen el papel social de liderazgo regional que no pueden mantener las decadentes elites regionales, debido a la desestructuración y

quiebre de sus bases de poder, y que por un tiempo es imposible tomar por parte del Estado. Estos roles de liderazgo comunitario se pueden dar también gracias a las funciones dinamizadoras -económica y socialmente hablando- de la Universidad de Huamanga desde principios de los sesentas. (Degredori, 1990)

iié

iié Simultáneamente con lo anterior, en la Amazonia Peruana también se desarrollan procesos de largo alcance: la colonización dirigida por el Estado en la zona prácticamente abandona al colono de la selva a su suerte, no garantiza la presencia de mercados ni proporciona el financiamiento necesario para la expansión productiva destinada al mercado; la presencia estatal se vuelve "negativa", (Faez, 1991) (Gonzalez Manrique, 1989), y la gran extensión territorial que debe controlar el virtualmente inexistente Estado (en la zona) está por encima de sus capacidades reales de control.

iié Así, simultáneamente, el Estado se deslegitima ante la población amazónica y pierde el control físico de amplios territorios teóricamente adscritos a su soberanía, se abre de esta manera un nuevo espacio de conflicto, donde se llegan a relacionar la contestación violenta de SL, su capacidad de controlar militarmente ciertas zonas inaccesibles para el Estado, con la producción cocalera destinada a la exportación de hoja de coca y pasta básica de cocaína. (Gonzalez Manrique, 1989:207-216)

(McClintock, 1988: 136-139). Tambien el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) encuentra un espacio de presencia en estas amplias zonas sin control estatal, que ademas -debido a la dinamica de la produccion cocalera en un contexto boyante-, potencialmente puede proporcionar grandes recursos economicos a los grupos contestatarios armados que operan en la zona.

iié La presencia de la corrupcion (10) permea practicamente todo el aparato estatal peruano. A pesar de que en todos los paises que participan en la llamada "guerra contra las drogas" existen altos grados de corrupcion (Nadelmann, 1986), tanto previamente existente, como inducida recientemente por los ingentes recursos de que dispone el narcotrafico, en el caso peruano esto es especialmente visible, por ejemplo en los sonados casos de corrupcion policial y de altos funcionarios estatales que se dan durante los gobiernos de Belaunde y Garcia (Nadelmann, 1986 y 1988) y marca uno de los aspectos centrales tanto del sistema politico peruano como de las instituciones estatales y las interacciones entre los diversos actores, lo cual es una referencia muy importante, mas aun en la perspectiva del analisis de la violencia.

ie

iié La probable evolucion (someramente) del caso peruano, apunta hacia una priorizacion de la lucha antiguerrillera, en tanto SL

(y marginalmente el MRTA) es el reto fundamental a la estabilidad institucional y del sistema, a mas de que se manifiesta como el fenomeno esencial de Violencia Politica, sea en sus acciones o por las respuestas estatales que provoca; si bien existieron en cierto momento rangos altos de violencia social provocada por el narcotrafico en las zonas de cultivo, (Gonzales Manrique, 1989) los negociantes de coca y cocaína no se han desplegado con el caracter que lo hicieron en Colombia, en parte debido al apoyo social de que dispone SL para controlar las logicas depredadoras del narcotrafico.

¿É No han logrado formar un grupo relativamente homogéneo de interés que presione sistemáticamente al Estado peruano por participación política autónoma, como si sucede en el caso colombiano. Sin embargo, la guerra contra las drogas provoca el llamado "efecto balón", por el cual una presión en cierta región de los Andes provoca el apareamiento de las logicas que se intenta destruir en otra parte de la región andina. Esto parecería estar pasando en el caso peruano, ya que existen pruebas de una sofisticación o "integración vertical" de los aspectos productivos de la cocaína en manos de grupos nacionales peruanos, con lo cual estos podrían potencialmente transformarse en una suerte de "narcoburguesía nacional peruana", que podría generar y manifestar a mediano plazo intereses políticos propios que los motiven a presionar por participar directamente en la toma de decisiones.

iié Esto debe ser entendido a la luz del contexto de priorización de la lucha estatal contra la guerrilla (SL y MRTA), y bajo las condiciones históricas de desintegración nacional, con antecedentes de corrupción estatal de largo alcance, todo lo que apunta hacia la posibilidad de una influencia social y política creciente de los empresarios de la cocaína, sobre la base de su sofisticación productiva e integración como grupo de interés, por lo que, prospectivamente, es altamente posible una suerte de "colombianización" del Perú, (Quehecer, # 61), es decir una situación de "múltiples soberanías" consolidada a mediano plazo.

iié Un elemento a ser considerado, al igual que en Colombia, es la participación creciente de las Fuerzas Armadas en los conflictos con la guerrilla. En el Gobierno de Belaunde, luego de una primera fase en que se desconoció el potencial violento de SL, se pasó inmediatamente a la declaratoria de Estados de Emergencia en algunos departamentos del país, especialmente serranos, donde la insurrección senderista era más fuerte y evidente. (Degregori, 1986)

iié En estas zonas, las fuerzas militares tuvieron un papel central, manteniendo una autonomía indiscutida en el manejo del conflicto armado; esta autonomía se expandió, conforme la misma insurgencia lo hacía, hacia otras partes del país, consagrándose así una suerte de "dimisión" de las autoridades civiles respecto

a su capacidad de manejar el conflicto y subordinar a las Fuerzas Armadas, de acuerdo a los objetivos políticos diseñados desde el gobierno.

iiÉ Esta tendencia se manifestó aun con mayor fuerza durante las "tomas" de las prisiones de Lurigancho y Fronton por parte de la Institución Armada, tomas en las que fueron ejecutados sumariamente centenares de reclusos de SL, por encima de la decisión del Gobierno Socialdemócrata de Alan García, creándose así un precedente ominoso en lo que respecta a la posterior evolución de las relaciones civico-militares. Una situación similar de alguna manera a la que se vivió durante el gobierno de Belisario Betancourt en Colombia, durante el "asalto" al Palacio de Justicia en Bogotá, donde también las Fuerzas Armadas Colombianas pasaron por alto la decisión política del Gobierno y operaron autónomamente frente a la situación. (Archer y Chernick, 1989: 51-54)

iiÉ En el momento del ascenso de Fujimori al poder, corrieron rumores intensos acerca de la posibilidad de un golpe de Estado preventivo, y los intensos cambios (casi globales) en la jerarquía militar luego del ascenso del Presidente Fujimori de alguna manera hicieron evidente esta situación de tensión incubada.(11)

iiÉ El contexto económico del caso peruano, en tanto se

diferencia radicalmente del colombiano, hace además que el Estado (al igual que en Bolivia) dependa con mucha mayor fuerza de los ingresos producidos por el complejo productivo coca-cocaína, y que por lo tanto su capacidad de maniobra frente al fenómeno sea menor. Sin embargo, el hecho de que no se haya desarrollado aun una elite nacional de narcotraficantes que intente constituirse en actor político autónomo hace mas amplios ciertos márgenes de operación para el Estado Peruano: no es visible aun una "narcotización" inmediata de la política nacional, pero las tendencias evolutivas prestan margen a que esta posibilidad se despliegue, especialmente luego de la reciente aceptación del Presidente Fujimori de la Militarización de la lucha contra las drogas.

ii Las políticas de Belaunde y Alan García frente al narcotráfico fueron destinadas a satisfacer aunque sea verbalmente las presiones norteamericanas que a enfrentar el reto del narcotráfico (en particular el cultivo de coca), que por otra parte cimentaba un puntal de la economía peruana, que en los ochentas se encontro en una profunda crisis global, ante la cual el gobierno se veía imposibilitado de acción libre. (García Sayan, 1989 y 1990)

ii El hecho de que la contestación armada también se desarrolló durante los mismos años con rasgos dramáticos, y de que esta

implicaba un reto mucho mas fundamental al Estado y el Sistema Politico tambien influyeron en la relativa secundarizacion del objetivo "lucha contra el narcotrafico" en la agenda del gobierno peruano, y la permanencia de esta situacion permite avisorar que el gobierno de Fujimori no se distanciara mucho de este patron de comportamiento estatal a futuro, ya que las Fuerzas Armadas se han mostrado renuentes a asumir una guerra en dos frentes, contra el narcotrafico (lease: contra el campesinado cultivador de coca) y contra la guerrilla simultaneamente (Cfr. Garcia Sayan, 1990).

Las perspectivas que tiene el Peru de responder al reto del narcotrafico dependen de condicionantes en otros ambitos, tales como la posibilidad de implementacion de una solida y viable politica de sustitucion de cultivos, lo que implica una dotacion financiera de recursos que no tiene el Estado peruano. Por otro lado, la superposicion de la zona cocalera con la influencia de la "Nueva Republica" Senderista hace aun mas oscuro el panorama. El gobierno de Fujimori ha desplegado hasta el momento una cierta continuidad con las politicas previas, ya que la estrechez de alternativas es evidente, aunque ha aceptado las ayudas norteamericanas para la lucha contra el narcotrafico, con la correspondiente exigencia de militarizacion de la lucha. La ejecucion viable de estos acuerdos pasa por ciertos problemas, ya que tanto para el gobierno civil como para las Fuerzas Armadas, el verdadero objetivo de Seguridad es derrotar a SL. (Cfr. Gonzales Manrique, 1989 y McClintock, 1988)

iié Ello no se puede realizar simultaneamente con la "guerra contra las drogas" y las propuestas norteamericanas para librarla militarmente, ya que el combate al cultivo de coca y a la dinamica economica que implica en la region del Huallaga, en tanto fortificaria la accion de Sendero Luminoso y el MRTA, generaria tambien severos impactos macroeconomicos, lo que haria potencialmente inviable a esta politica.

iié De ahí se arranca la ambigüedad del Estado peruano frente al problema del narcotráfico y la violencia: los recursos estabilizadores de la economia ilegal, en el plano macroeconomico, el caracter del conflicto social y politico que provocaria en el Huallaga una lucha concebida en terminos militares, la carencia de alternativas viables de sustitucion de cultivos y el hecho de que semejantes politicas potenciarian aun mas el reto politico-militar incremental de Sendero Luminoso hace que el narcotráfico no este en la mira, por lo menos en el plazo inmediato para el Estado Peruano.

iié

d) Ecuador: un caso atipico

iié Dentro de la economía del narcotráfico, al Ecuador le corresponde un rol secundario, que si bien lo articula al proceso global, lo hace de una manera tal que los efectos disruptores más evidentes de la actividad sobre el sistema político y en términos de retos al Estado no se presentan, como lo hacen en los casos colombiano y peruano. Por otra parte, la carencia de una base social de campesinos dedicados a la producción de la hoja de la coca, y la presencia reducida de laboratorios de refinamiento de cocaína (PBC o clorhidrato) en nuestro país, (USDS, 1990 y 1991) permiten que el país tenga condiciones atípicas en el contexto andino, agitado por la "guerra contra las drogas" y los retos que sufre el Estado en razón del narcotráfico y la contestación violenta.

iié

iié También en lo referido a las guerrillas, Ecuador es un caso atípico, ya que los intentos de generar organizaciones armadas no han tenido inserción en la sociedad, y han sido derrotados en toda línea, política y militarmente, sin mucho esfuerzo por parte del Estado (Villamizar, 1990), aunque esto no permite suponer que la contestación armada no tenga espacios sociales que puedan fundamentar una posible inserción social más fuerte prospectivamente (Bonilla, 1991b)

iié Desde la perspectiva del Sistema político ecuatoriano, manifiesta ciertas diferencias respecto a los de sus vecinos, en lo que respecta a la amplitud de los actores incluidos en la

institucionalidad política. La estructuración reciente del sistema político, a raíz del llamado "Proceso de Reestructuración Jurídica y del Estado", acaecido en las últimas fases del gobierno militar de los setentas, logró formular un esquema institucional donde no existían exclusiones de actores significativos.

iié A pesar de la preeminencia de las lógicas parainstitucionales y prebendales, de la extensión del clientelismo en contextos signados por la precariedad estructural, y de la presencia del autoritarismo en la cultura política del país, formas de interacción política que permanecen aun después de la Reestructuración (Menéndez-Carrión, 1986 y 1989), el sistema político ecuatoriano no ha sufrido el embate sistemático de grupos violentistas los cuales además han carecido de apoyo social significativo; por otra parte, no se han priorizado sino marginalmente las modalidades coercitivas abiertas en la relación Estado -Sociedad, precisamente a causa de la carencia de retos contestatarios armados a la institucionalidad política.

iié Históricamente, existe un proceso temprano de "integración" al sistema, tanto de las organizaciones laborales (Paez, 1990) como de los partidos políticos de la izquierda marxista, mediante sus dos partidos- eje, el Socialista y el

Comunista, desde fines de los veinteos y principios de los treinta (Facy, 1989b) hasta la década de los sesenta, en que se abre la posibilidad de cuestionamientos a las políticas participativas que la izquierda ecuatoriana se había trazado prácticamente desde su fundación.

iié Por ello se ha planteado (Bonilla, 1991b) que en los sesentas la izquierda marxista pasa por una etapa "refundacional", y el discurso político de la "nueva izquierda de los sesenta pone su acento retórico en la contestación armada, aunque los intentos de llevarla a cabo fracasaron en sus etapas más primarias, como fue el caso de las llamadas "querrillas del Toachi", que no llegaron a durar ni una semana en las armas. (Bonilla, 1991b) (12)

iié Esta condición de relativa apertura histórica del sistema político, en términos de la aceptación de la participación de todos los actores significativos, salvo en ocasiones extraordinarias (en los últimos cuarenta años el Partido Comunista fue prohibido solamente durante la dictadura militar de 1963-1965) es una de las claves para entender la diferente cualidad del Ecuador respecto a sus vecinos, particularmente en lo referido a la posibilidad de generación y desarrollo de la contestación violenta. Esto no implica que el sistema político sea inclusivo, pues procesos de exclusión social se manifiestan con intensidad, así como caracteres elitarios, personalistas,

formas privadas y no ciudadanas de interacción política. (Menendez-Carrion, 1989)

iié Otro punto de entrada que permite establecer diferencias sustanciales con los vecinos andinos se remite a que el Estado tiene una gran capacidad de control territorial, incluso sobre sus zonas mas "perifericas", tales como la amazonia, (Faez, 1991b) debido en parte a continuas perdidas territoriales, precisamente frente a Colombia y Peru, paises que ampliaron desmesuradamente sus espacios amazonicos mediante la confrontacion militar y diplomatica con un vecino mas debil.

iié Tambien se debe aludir al hecho de que la integracion del Espacio nacional durante el ultimo medio siglo avanzo por esta misma razon mas rapidamente que en otros paises andinos, y que las posibilidades de un control militar mas estrecho y una cobertura estatal mas profunda tambien se ampliaron por las mismas razones. Si bien la dinamica de integracion nacional empieza a ser visible recién a principios de siglo, mediante el ferrocarril, (Deler, 1986) la retraccion del espacio fisico sometido a control estatal permitio una mayor concentracion espacial y facilito la cobertura global del espacio adscrito a la soberania del Estado.

iié La presencia de la contestacion violenta ha sido, como ya se

ha señalado, marginal. Solamente durante los ochenta aparecieron dos grupos armados, del tipo de la llamada "izquierda nacionalista", que fueron Alfaro Vive Carajo (AVC) y Montoneras Patria Libre (MPL). Estos grupos, con contactos internacionales, en particular con sus homólogos Colombianos, intentaron librar un enfrentamiento armado con el Estado, el que por su parte respondió con una pequeña "guerra sucia" durante el gobierno derechista del Presidente Febres-Cordero, (Villamizar, 1990)

iié Estos grupos se constituyeron desde un voluntarismo extremo, sin bases sociales, siendo formados esencialmente por una militancia proveniente de la clase media, estudiantes y profesionales jóvenes, como proyectos levantados por restringidos segmentos urbanos, sin apoyo campesino y bastante marginales tanto en lo que respecta a la amplitud de sus bases sociales, como en lo referido a su capacidad militar, así como en sus posibilidades políticas. (Bonilla, 1991b y Paez, 1991b)

iié A pesar de la derrota política y militar, (y este es un punto que puede abonar en favor de la tesis de una mayor apertura relativa del sistema político ecuatoriano frente a sus pares andinos), una vez que fue casi liquidado, AVC pudo entrar en un acuerdo de reinserción al sistema, al estilo del M-19 colombiano, pero sin que jamás haya constituido un reto central a la estabilidad del sistema, y sin que tampoco se presenten, como sus colegas colombianos, con una fuerza política y electoral

importante, ni siquiera de segundo orden, en el escenario post-reinsercion. (13)

iié Sin embargo, los severos desequilibrios regionales que se presentan entre costa y sierra, que implican la existencia de practicamente dos tipos de sociedades regionales en el mismo espacio "nacional" implican una posible linea de fisura en el diseno institucional ecuatoriano. Habria que decirse que estos desequilibrios no se manifiestan como en el caso Peruano por la dominacion unidireccional de la Costa (en particular el mega-polo Lima) sobre los Andes, sino mediante una suerte de equilibrio dinamico e inestable entre los dos mega-polos nacionales: Quito y Guayaquil, el primero articulado con mayor fuerza a la presencia y desarrollo Estatal, aunque tambien con un desarrollo economico privado fuerte, y el segundo relacionado con la pujante y dinamica actividad agroexportadora, comercial y los circuitos financieros mas fuertes del pais. (Cfr. Lefebvre, 1987)

iié Los actores politicos centrales en el sistema de partidos se encuentran cruzados por la realidad de la situacion de diversidad regional y pobre integracion a nivel simbolico en el plano nacional, a pesar de la existencia de una integracion espacial significativa, y se manifiestan en relacion a los grupos de interes regionalmente situados. Asi, el espectro partidario tiene una tendencia grande a la centrifugacion en orden a

intereses y discursos regionalmente situados e incluso, se podría decir, en relación a "culturas políticas regionales" diferenciadas (Faez, 1991c)(14)

iié Otro clivaje que se manifiesta con gran fuerza es el étnico: la diferencia entre los indígenas y el resto de la sociedad, que se ha transformado en el punto de conflicto potencial más importante al momento. La activación política de un segmento de la población bajo reivindicaciones étnicas es una transformación cualitativa en el carácter del proceso político ecuatoriano, que repercutirá seguramente sobre el sistema político y el Estado. El llamado "levantamiento indígena", acaecido en julio de 1990, ha llevado a cuestionamientos profundos acerca de la forma misma del Estado por parte de las organizaciones indígenas como la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), en tanto la necesidad que plantean de que exista aceptación de la pluralidad nacional y la perspectiva de posibles autonomías étnicas a ser procesadas institucionalmente en el sistema y por los actores.

iié La participación de las Fuerzas Armadas en este conflicto es creciente, máxime cuando podemos asegurar que el proyecto de modernización autoritaria (similar en algunos aspectos al peruano de los setentas), que condujo a la reestructuración jurídica, partió precisamente de un diagnóstico sobre la probable

inviabilidad de un proyecto de Estado-Nación sobre la base de la dinámica social y económica librada a su propia suerte. (Argones, 1985) (Bocco, 1987) Los militares se plantearon a sí mismos un papel creador de las condiciones de viabilidad de un proyecto de Estado -Nación unitario, (Argones, 1985) y esta perspectiva se encuentra en el centro de su identidad autoreferida y su ideología como aparato estatal. (Bustamante, 1988) (Schodt, 1987)

iié A raíz de esta percepción ideológica institucional, y más allá de la modernización autoritaria que condujeron en los setentas, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas se han embarcado en un proceso creciente de presencia autónoma como actor económico y social, y han mantenido un perfil negociado de actor político, dentro de lo que sería definido como los "acuerdos fundacionales" del nuevo sistema político. Asonadas militares, algunas de ellas abortadas, como la de 1982 (Mills, 1984) y otras posteriores, que si llegaron a ejecutarse, como los llamados "Vargazos" (1986 y 1987) permiten percibir un fermento de acción política directa en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que en un momento dado pueden volverse en contra de los débiles gobiernos civiles, (Bustamante, 1988) maxime cuando institucionalmente existen severos impasses entre las funciones estatales, que continuamente orillan a crisis institucionales con perspectivas inciertas, todo lo cual posibilita generalmente las intervenciones militares. (Rouquie, 1981) (15)

if En lo que se refiere a las acciones gubernamentales, durante los ochenta, en la Presidencia de Leon Febres Cordero, el unico indicio de movimiento armado contestatario fue reprimido mediante el uso de la violencia estatal, incluso en los planos ilegales (desaparecimientos y ejecuciones sumarias). (Villamizar, 1990).

if El cambio de eje de conflicto violento pasa ahora al plano social, a causa de la activacion politica del indigenado, aunque aun en calidad de "protoactor" (en tanto las demandas que plantea al sistema politico son recientes y aun no se puede afirmar que tendran larga permanencia como item de las politicas publicas), y sus consecuencias son poco claras, ya que aun quedan libradas a la interaccion dinamica con el contexto social, politico y las reacciones de otros actores frente a esta nueva identidad en proceso de constitucion.

if La posibilidad de existencia de manifestaciones violentas, en prospeccion, con mayor acogida social que sus predecesoras, potencialmente puede pasar por este camino, maxime cuando se encuentran en juego intereses institucional-burocraticos, como los de las Fuerzas Armadas, las cuales han definido al Estado ecuatoriano como unitario y centralizado, y que por ello mantienen una actitud de alerta frente a las propuestas indigenas de reconocimiento de una estructura multinacional y descentralizada para el Estado.

ié Por otra parte, y desde otros ambitos de la sociedad, tambien se presentan resistencias al proyecto indigena, por parte de ciertas elites politicas (vinculadas con los grupos de poder provinciales y los propietarios territoriales), a lo que se suma la actitud cuestionadora de los medios de comunicacion publica, que perciben este problema como un punto critico, no sujeto a negociacion de ningun genero (16). Por ello, aunque con una evolucion aun indeterminada, se puede afirmar que en este momento aparece una nueva "sede de conflicto" "de antagonismo" (Laclau y Mouffe, 1987) que -si no encuentra salida institucional mediante una reformulacion negociada de algunos aspectos basicos de la concepcion politica del Estado ecuatoriano, podria desembocar en violencia social y politica, que integraria dentro de si intereses burocratico-institucionales e incluso autoreferencias de identidad ideologica de las Fuerzas Armadas.

ié En el caso ecuatoriano, la carencia de bases sociales campesinas dedicadas a la produccion cocalera, la virtual inexistencia de contestacion armada, la capacidad de control del Estado sobre el conjunto del espacio nacional hacen que la violencia relacionada con el narcotrafico, como fenomeno nacional, sea inexistente, invisible. Existe, de todas maneras, cierto tipo de violencia en las zonas de frontera, pero mas bien relacionada con la difusion de conflictos en los llanos orientales y el Putumayo colombiano, (por ejemplo, incursiones de grupos guerrilleros en territorio nacional, secuestros y algunos

incidentes de enfrentamiento armado del ejercito con narcotraficantes colombianos) antes que con la presencia de logicas de violencia endogenas, ecuatorianas.

ié Es posible tambien ligar ciertas formas urbanas de violencia social -en particular delincuencial- con fenomenos como el narcotrafico; lo que es muy dificil seria presentarlas como situaciones de inseguridad generalizada y de violencia politica, y peor aun, identificarlas con las categorias cuestionables de "narcoguerrilla" o "narcoterrorismo", como se hace en algunos articulos, donde se afirma que "La introduccion del narcoterrorismo en el sistema politico ecuatoriano fue reflejado por un numero de incidentes en 1986 y 1987 (MacDonald, 1990 264), sin aportar pruebas de la afirmacion que se emite, y luego concluir (de una manera algo contradictoria con la afirmacion previa) que:

Seria incorrecto afirmar que el narcoterrorismo (en cualquier forma, pero en particular, el nexo droga-insurgencia) es una fuerza mayor en Venezuela, Chile o Ecuador a este punto, pero el potencial para mayores problemas de seguridad existe y es mayor en Ecuador...(MacDonald, 1990: 268)

ié

ié Si ha existido una relacion entre narcotrafico y formas de violencia politica, parece haberse dado en terminos de la funcionalizacion coyuntural de ciertos grupos delincuenciales,

con bases sociales en las llamadas "invasiones" en busca de vivienda en las periferias urbanas de Quito y Guayaquil, relacionadas con la presencia de logicas clientelares: seria el caso de los grupos del abogado Jaime Toral Zalamea, lider de invasiones en la zona denominada "Las Malvinas" en Guayaquil, y la cooperativa de vivienda "Jaime Roldos" en Quito, pero como ya se ha argumentado en otro trabajo (Faez, 1989a), esta relacion lo unico que tenia que ver con el narcotrafico era garantizar libertad de accion a los grupos delincuenciales para cubrir fracciones del mercado interno de sustancias psicoactivas.

Así pues, la diferencia de Ecuador con respecto a sus vecinos andinos en referencia al problema es clara, en la medida de que ni el narcotrafico ni los grupos contestatarios armados se han establecido como poderes con capacidad de "jaquear" al Estado y crear una situacion (potencial o real) de "múltiples soberanias. Sin embargo, el Estado ecuatoriano se ha apropiado de la retorica de la Guerra contra las drogas, y ha impulsado legislaciones de caracter represivo para tratar con los consumidores y los posibles plantadores. (Faez, 1991b) La invisibilidad del caso ecuatoriano hace que se remarquen estas respuestas ideologizadas a un problema que no se presenta de ninguna manera con los caracteres que tiene en otras regiones de los Andes, y que el Ecuador sea presentado como un "modelo" a seguirse en lo que respecta a una legislacion que enfatiza en una vision policial-represiva.

YÉ

YÉ Esto no implica que el Ecuador sea "una isla de paz". Las lógicas interpenetradas de la internacionalización económica, la acción transnacional de fuerzas sociales y Estados hace que en el caso del narcotráfico, nuestro país se haya transformado en una suerte de "retaguardia estratégica", tanto para los organismos de represión a nivel internacional, como para los traficantes y guerrillas, especialmente colombianas. Por otra parte, de hecho el país tiene una participación (aunque subalterna) en el negocio y la división del trabajo, en la economía política de la droga a nivel andino, pero, y esto puede quedar como conclusión de todo lo anterior, son las circunstancias contextuales del sistema político, las características del Estado, las que crean los contextos e impulsan los procesos de violentización y permiten el apareamiento de actores que pueden optar por recursos violentos para la resolución de conflictos.